

Banderazo a Santa Lucía

Colocado en la ruta crítica el mes de febrero para cancelar la emisión de bonos lanzada por la Fibra E para financiar la posibilidad del aeropuerto de Texcoco, ese mismo mes se iniciarán las obras para adaptar como terminal aérea la base militar de Santa Lucía, ubicada en Zumpango. De hecho, la Secretaría de la Defensa Nacional, responsable de la obra, ya tiene los estudios de factibilidad avalados por la Organización de Aviación Civil Internacional y la Dirección General de Aeronáutica Civil. El cálculo habla de dos años entre el dicho y el hecho.

La posibilidad de que sea la Defensa y no la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la responsable del proyecto, llegó tras un desencuentro entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y el titular de la dependencia, Javier Jiménez Spriú. Durante una reunión del gabinete, el Ejecutivo le exigía una y otra vez a éste que la obra se desahogara en dos años, ante cuya reiterada negativa a comprometerse, sin más se le pasó la estafeta... y el grueso expediente que llevaba el funcionario, al titular de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval González.

Como usted sabe, el gobierno anterior le encargó al ejército la construcción de la barda perimetral del fallido Nuevo Aeropuerto Internacional de México y el de Toluca en busca de equilibrio. La ruta habla de ubicar conectividad entre la actual terminal "Benito Juárez", y la que se construye. Este tendría no sólo zonas de estacionamiento sino espacios mercantiles, incluyendo renta de vehículos, sitios de transporte público y espacios para llegada de transporte masivo y camiones de carga.

Entre el próximo febrero y diciembre se realizarán los estudios de geotecnia, topográficos y levantamiento de obstáculos, en afán de certeza sobre las características del suelo. En paralelo, se plantean estudios sobre condiciones meteorológicas que permitan certeza para la orientación, separación y longitud de las pistas, torre de control y ayudas a la navegación. Más allá, se analiza la orografía del suelo; la posibilidad de daños al patrimonio arquitectónico y, naturalmente, el impacto ambiental, con un capítulo adicional que apunta al social.

La primera ministración de recursos públicos, estrictamente para financiamiento de estudios, fue de 885 millones 571 mil pesos. El plan maestro se diseñará en dos tramos, el primero en marzo y el segundo en junio. De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional, Santa Lucía será un aeropuerto mixto, es decir tanto civil como militar, con capacidad internacional. La cuenta regresiva es de dos años

Odebrecht y Oceanografía. Como Oceanografía, quien le planteó a Petróleos Mexicanos una larga, larga lista de adeudos por supuestos avances de contratos que se le cancelaron, la firma brasileña Odebrecht está reclamando sus propios piquitos. El reclamo apunta a una indemnización de mil 878 millones de pesos por la rescisión unilateral de un contrato para obras de reconfiguración de la refinería de

Tula. El reclamo fue admitido por un tribunal colegiado. Ante la imposibilidad, al menos en el actual sexenio, de recibir nuevos contratos, la firma está tratando de excavar hasta lo último.

COLUMNA DE ENRIQUE CAMPOS SUAREZ. Enero 31 del 2019

El presidente debería agradecer al mensajero

La firma calificadora Standard and Poor's decidió, en agosto del 2011, degradar la calificación perfecta de la deuda soberana de Estados Unidos, como consecuencia de la Gran Recesión que se había gestado en los propios mercados. La respuesta iracunda del gobierno estadounidense fue una demanda en contra de la calificadora, 18 meses después, por calificar de manera errónea los bonos hipotecarios que desataron la crisis subprime. Oficialmente se negó siempre el vínculo, pero a esa empresa le costó una multa de 1,375 millones de dólares.

Más allá de estas aparentes consecuencias represivas, las firmas calificadoras están relativamente acostumbradas a que los que se sienten afectados por una degradación crediticia "maten al mensajero". Por eso es que no hay sorpresa en que el presidente Andrés Manuel López Obrador decida enderezar su artillería en contra de la firma calificadora Fitch Ratings, tras la decisión de rebajar dos escalones la nota crediticia de Pemex y dejarla en perspectiva Negativa, en la "orillita" del papel basura. No hay sorpresa, porque es parte del estilo de gobernar del actual mandatario.

Hipócritas, charlatanes, cómplices de la corrupción, son algunas de las descalificaciones que el presidente López Obrador dedicó a Fitch Ratings. La firma calificadora puede vivir con eso, porque su obligación no es agrandar políticos, sino advertir a sus clientes sobre los riesgos de inversión. Los manuales de propaganda y las fases de la depresión se parecen porque el primer punto siempre será la negación.

No le hace ningún favor a la estabilidad financiera el hecho de que el propio jefe del Ejecutivo considere que hoy Petróleos Mexicanos está en su mejor momento de los últimos 30 años. Simplemente porque es totalmente falso. Fitch Ratings, y eventualmente las otras calificadoras que sigan este camino de degradación de la nota crediticia de Pemex, no tiene ningún interés político en el tema, no se van a meter a señalar que los funcionarios elegidos para manejar el sector energético carecen de la más mínima preparación en el tema.

No le toca a una firma que analiza las posibilidades de pago de una deuda hablar del ridículo que hicieron los funcionarios de Pemex en Nueva York. Vamos, ni siquiera le toca cuestionar la falta de viabilidad de construir refinerías en estos tiempos. Pero tampoco le va a hacer el caldo gordo al gobierno actual denunciando el pésimo manejo que se ha hecho de Pemex durante tantas décadas. El gobierno actual debería tomar con más serenidad y seriedad la degradación crediticia de Petróleos Mexicanos y tomar cartas en el asunto.

Hay una firma financiera, que tiene reconocimiento global, que le está haciendo una advertencia a tiempo al gobierno del presidente López Obrador sobre la salud financiera de la empresa pública más importante del país y no le está cobrando por el aviso. Más que enojo y descalificaciones, deberían sacar de la nueva calificación degradada la necesidad de contar con profesionales al frente de la empresa, tener una buena gobernanza empresarial, aumentar la apertura a la inversión, reenfocar los proyectos para privilegiar los negocios rentables y procurar la salud financiera de Pemex.

Para Fitch Ratings, los instrumentos de deuda de la petrolera mexicana están en la orilla del papel basura y de ahí a un contagio de degradación de la nota soberana mexicana hay un paso no muy grande. Hace falta mucho más que un traspaso por ósmosis de la honestidad presidencial a una empresa que ha sido destruida en el tiempo y que no merece un manejo tan incompetente en la actualidad.
ecampos@eleconomista.com.mx